



AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95.
QUEJOSO: JAVIER SOTO GONZALEZ.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: LICENCIADA LUZ CUETO MARTINEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de octubre de mil novecientos - noventa y cinco.

VISTO BUENO:

VISTOS, para resolver el toca 565/95, relativo al recurso de revisión interpuesto por Javier Soto González por su propio derecho, en contra de la resolución de fecha veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cinco, dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 277/94, y

COTEJO:

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del que por razón de turno tocó conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Javier Soto González, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.

"Se señalan como autoridades responsables a las siguientes:

"1.- Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

"2.- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

"3.- Secretario de Gobernación.

"4.- Congreso de la Unión.

"5.- Director del Diario Oficial.

"IV.- ACTOS RECLAMADOS Y SENTENCIA:

"1.- Se señala como acto reclamado la sentencia de "fecha 14 de noviembre de 1994, que fue publicada en el "Boletín Judicial del día 15 del mismo mes y año, dictada en "los autos del toca 3279/94, por la Segunda Sala del Tribunal "Superior de Justicia del Distrito Federal, donde se resolvió "el recurso de apelación interpuesto por el suscrito ^{SECRETARÍA} ~~en~~ ^{SECRETARÍA} ~~de~~ ^{SECRETARÍA} ~~la~~ "contra de la sentencia definitiva de fecha 20 de junio de "1994, dictada por el Juez Trigésimo Segundo del "Arrendamiento Inmobiliario, en los autos del juicio "controversia de arrendamiento seguido por Héctor Jiménez "Mondragón en contra del suscrito, expediente 277/94, "Secretaría "A".

SEGUNDO.- En el escrito de demanda se señalaron como garantías individuales violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales; se expusieron los conceptos de violación que estimó pertinentes, de los cuales sólo se transcribe a continuación el segundo, que tiene relación con la presente revisión:

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"SEGUNDO.- Establece la sentencia definitiva que
"constituye el acto reclamado en el considerando III, lo
"siguiente:

"III.- Encontrándose el presente asunto dentro de
"la hipótesis contenida en el artículo 140 fracción IV del
"Código Procesal Civil, se condena al recurrente al pago de
"las costas procesales causadas en ambas instancias en favor
"de su contraparte".

"El considerando anterior se impugna en relación
"con el punto resolutivo primero y segundo de la misma
"sentencia, por ser una consecuencia directa e inmediata de
"la misma, los cuales acogen lo manifestado en lo antes
"transcrito.

"Con fundamento en el artículo 166 fracción IV de
"la Ley de Amparo impugno el inconstitucional artículo 140
"fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles aplicado
"por la responsable en la sentencia que constituye el acto
"reclamado.

"En el considerando antes transcrito, la autoridad
"responsable aplica un precepto que a todas luces es
"inconstitucional, por ello se tilda el artículo 140,
"fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, como
"contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos
"Mexicanos.

"Se dice lo anterior, en virtud de que el artículo
"14 constitucional establece con claridad y sin restricción
"alguna la posibilidad de los particulares a defenderse en
"juicio, es decir, que ninguna autoridad puede ordenar la
"privación de sus posesiones o derechos sin previo juicio,
"donde se cumplan las formalidades esenciales del
"procedimiento.

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"Sin embargo, el artículo 14 constitucional, en
"ninguna parte establece o permite una sanción al particular
"que ha participado en un juicio y que ha sido condenado, ni
"señala que el legislador ordinario en alguna Ley Procesal,
"pueda establecer sanciones a un particular por defender sus
"derechos en el juicio.

"Por lo anterior, el artículo 140, fracción IV, del
"Código de Procedimientos Civiles es contrario a la
"Constitución, concretamente al artículo 14, porque como ya
"se explicó este precepto no señala límites o sanciones por
"defenderse en un juicio y no señala la existencia de
"sanciones de carácter pecuniario, como ilegalmente lo
"establece el artículo que se tilda de inconstitucional.

"El artículo 140, fracción IV, del Código de
"Procedimientos Civiles, es contrario de una manera directa
"al artículo 14 de la Constitución ya que impone gravámen
"la posibilidad de defensa que tiene todo particular
"rebasando al artículo 14 constitucional, el que no permite,
"ni señala, ni preceptúa ninguna sanción para el que es
"vencido en juicio, por lo que no puede haber una debida
"fundamentación y motivación, como se exige en el artículo 16
"constitucional, por lo que solicito a este Tribunal
"Colegiado, estudie la inconstitucionalidad que se propone.

"Reiterando se argumenta, que el artículo 140,
"fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, no
"encuentra apoyo legal constitucional, por no existir
"precepto en la Carta Magna que permita la imposición de
"sanciones de carácter económico, para un particular que
"participa en un procedimiento judicial.

"El considerando transcrito de igual manera viola
"el artículo 17 constitucional, ya que este precepto señala



AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"con claridad que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por Tribunales que deben estar expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, preceptuando con claridad que dicho servicio es gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales.

"Es evidente que el artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles va en contra de una manera directa del artículo 17 constitucional, ya que permite la imposición y cobro de costas en perjuicio de los litigantes que intervinieron en el juicio, porque señala una condenación en costas para diversas hipótesis que hayan existido en el procedimiento, y como ya se dijo el precepto constitucional que motiva este agravio no hace ningún distingo, sino que lisa y llanamente prohíbe las costas judiciales, lo que hace patente la violación directa existente del artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles.

"En efecto el precepto antes señalado ordena y permite la imposición de costas judiciales en perjuicio de alguna de las partes en el proceso, situación contraria y no permitida por el artículo 17 constitucional y la autoridad que resolvió el amparo se abstiene de aplicar y analizar esta violación alegada en los conceptos de violación, por lo que este Máximo Tribunal deberá restaurar la legalidad, declarando la inconstitucionalidad del artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, ya que este precepto va en contra de la norma constitucional que motiva y funda este agravio, la cual como ya se dijo prohíbe con claridad el pago y cobro de costas judiciales sin hacer

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"distinción alguna y tanto el precepto tildado de
"inconstitucional como la autoridad que resolvió el amparo
"hacen distinciones no apoyadas en ningún precepto
"constitucional.

"Asimismo y en este acto se impugna de
"inconstitucional el artículo 402, del Código de
"Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicado
"por la autoridad responsable en la sentencia que se impugna.

"Establece el artículo tildado de inconstitucional
"que los medios de prueba aportados y admitidos, serán
"valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las
"reglas de la lógica y de la experiencia; interpretando dicho
"artículo, se desprende que el mismo es contrario a la
"dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, en
"virtud de que contrario a lo establecido por dicho precepto
"secundario las pruebas aportadas deberán ser valorizadas
"acuerdo a la interpretación jurídica y actuar siempre
"apego a las leyes expedidas y a la Constitución.

"En este orden de ideas se desprende que los
"preceptos constitucionales invocados prohíben resolver o
"valorar pruebas de acuerdo a la lógica y a la experiencia,
"ya que deben de acreditar hechos constitutivos de
"pretensiones de las partes en un juicio para que se declare
"procedente la acción que se ejercita, y no realizar una
"interpretación unilateral y subjetiva que tenga como soporte
"legal la "lógica" y la "experiencia" ya que en tal caso
"incurre en inconstitucionalidad.

"En efecto, en ningún artículo de los preceptos
"constitucionales invocados se desprende que la autoridad
"pueda revolver y mucho menos valorizar pruebas de acuerdo a
"la lógica y a la experiencia, ya que con tal actuar se

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95



"aparta de los lineamientos establecidos en nuestra
 "constitución, más aún se permite a los juzgadores actuar en
 "forma por demás inconstitucional y caprichosa en perjuicio
 "de los particulares, pues es dable entender que siempre que
 "se aplique dicha regla inconstitucional se hará de una
 "manera indebida e ilegal al carecer de la debida
 "fundamentación y motivación, aunado a lo anterior que no
 "puede tener sustento jurídico alguno ninguna prueba ofrecida
 "por el particular por no haberse violado las formalidades
 "del procedimiento, dando por consecuencia que dicho artículo
 "por sí mismo resulta inconstitucional y violatorio de
 "garantías individuales de esta parte quejosa y establecidas
 "en los artículos 14 y 16 constitucionales.

"Apoyan lo antes dicho los siguientes criterios
 "jurisprudenciales:

""INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. QUE EN MATERIA
 ""CIVIL FACULTE A LOS JUECES A SENTENCIAR CONFORME A SU LEAL
 ""SABER Y ENTENDER. - Resulta contrario a la Constitución el
 ""ordenamiento que en materia civil faculte a los jueces a
 ""resolver conforme a su leal saber y entender, pues no es
 ""esto lo que autoriza al artículo 14 de nuestro Código
 ""Político, sino que los jueces resuelvan conforme a la ley
 ""y a su propia interpretación jurídica. y a falta de ella a
 ""los principios generales de derecho, en la inteligencia de
 ""que si existen en nuestro país legislaciones como la del
 ""Distrito y Territorios Federales que en tratándose de la
 ""justicia de paz facultan al juzgador a usar de su leal
 ""saber y entender, esto es sólo para la apreciación de las
 ""pruebas, más nunca para sentencias, ya que como se tiene
 ""dicho, la sentencia, por virtud del mandato imperativo
 ""contenido en el invocado artículo 14, forzosamente tiene

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

""que estar apoyada en la ley y sólo que ésta falte en los
""principios generales de derecho".

"Revisión 1200/1955.- Amalia Díaz Nava. Resuelto el 18 de
"marzo de 1957. Mayoría de 4 votos, contra el del señor
"Ministro Castro Estrada. Ponente el señor Ministro García
"Rojas, Secretario Lic. Raúl Ortiz Urquidí.

""PRUEBAS RECEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD.- La recepción de
""las pruebas jamás debe dejarse por la ley al arbitrio del
""juez, sino establecerse a favor de las partes, por ser una
""garantía substancial de que éstas deben gozar dentro de
""todo procedimiento, por lo que la ley que tal haga, es
""flagrantemente inconstitucional".

"Revisión 1200/1955. Amalia Díaz Nava. Resuelto el 18
"marzo de 1957, por mayoría de 4 votos, contra el del señor
"Ministro Castro Estrada. Ponente el señor Ministro García
"Rojas. Secretario Raúl Ortiz Urquidí.

"En tal virtud, es procedente que esta Superioridad
"revoque la sentencia en este punto y dicte la que
"corresponda conforme a derecho otorgando en su oportunidad
"el amparo y protección de la Justicia Federal".

TERCERO.- El Presidente del Octavo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante
acuerdo de primero de febrero de mil novecientos noventa y
cinco, admitió la aludida demanda de amparo (fojas 13 del
cuaderno de amparo), la registró con el número 3279/94, y,
tramitado el juicio se dictó sentencia el veintitrés de
febrero de mil novecientos noventa y cinco, la que concluyó
con los siguientes puntos resolutivos:

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95



"PRIMERO.. Se sobresee en el juicio de amparo
 "promovido por Javier Soto González en contra de las
 "autoridades señaladas como responsables: Congreso de la
 "Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
 "Mexicanos, Secretario de Gobernación y Director del Diario
 "Oficial de la Federación.

"SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni
 "protege a Javier Soto González, en contra del acto reclamado
 "consistente en la sentencia dictada por la Segunda Sala del
 "Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el
 "catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en
 "el toca de apelación número 3279/94."

Las consideraciones en que se apoyó el
 Tribunal Colegiado en relación a la inconstitucionalidad
 planteada son las siguientes.

"...Asimismo, en el segundo concepto de violación
 "el quejoso impugna la inconstitucionalidad de los artículos
 "140, fracción IV, y 402 del Código de Procedimientos Civiles
 "para el Distrito Federal, por estimar que son contrarios al
 "contenido de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.

"En principio, debe señalarse que con fundamento en
 "el artículo 158 de la Ley de Amparo resulta procedente el
 "estudio de la inconstitucionalidad planteada respecto de los
 "artículos 140, fracción IV, y 402 del Código de
 "Procedimientos Civiles para el Distrito Federal toda vez que
 "fueron aplicados en la sentencia que constituye el acto
 "reclamado, al analizar las pruebas aportadas en autos y al
 "condenar al ahora quejoso al pago de costas en ambas
 "instancias.

LOS
 CORTE DE JUSTICIAS
 APLICACIONES
 GENERAL DE ACUERDO

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"El último párrafo del referido artículo 158
"dispone:

"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que
"no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de
"leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán
"hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de
"la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al
"juicio".

"Por razón de método se analizará en primer término
"el concepto de violación dirigido a combatir la
"inconstitucionalidad del artículo 402 del Código de
"Procedimientos Civiles.

"El peticionario de garantías argumenta que el
"artículo tildado de inconstitucionalidad establece que los
"medios de pruebas aportados y admitidos, serán valorados en
"su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de ~~la~~ SUPREMA CORTE
"lógica y de la experiencia; que este contenido es ~~cont~~ DE LA SECRETARIA GENE
"a lo establecido por los artículos 14 y 16 constitucionales,
"en virtud de que conforme a estos preceptos, las pruebas
"aportadas deberán ser valoradas de acuerdo a la
"interpretación jurídica y actuar siempre con apego a las
"leyes expedidas y a la Constitución.

"Que los preceptos constitucionales invocados
"prohiben resolver o valorar pruebas de acuerdo a la lógica y
"a la experiencia, ya que deben de acreditar hechos
"constitutivos de pretensiones de las partes en un juicio
"para que se declare procedente la acción que se ejercita, y
"no realizar una interpretación unilateral y subjetiva; que
"más aún con el artículo de la ley secundaria en análisis se
"permite a los juzgadores actuar en forma por demás
"inconstitucional y caprichosa en perjuicio de los



AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"particulares, pues es dable entender que siempre que se
"aplique dicha regla inconstitucional se hará de una manera
"indebida e ilegal al carecer de la debida fundamentación y
"motivación.

"Es infundado el anterior argumento.

"El artículo 14 constitucional establece lo
"siguiente:

""ART. 14.- A ninguna ley se dará efecto
""reatroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá
""ser privado de la vida, de la libertad o de sus
""propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio
""seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el
""que se cumplan las formalidades esenciales del
""procedimiento y conforme a las leyes expedidas con
""anterioridad al hecho.- En los juicios de orden criminal
""queda prohibido imponer por simple analogía y aun por
""mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una
""ley exactamente aplicable al delito de que se trata.- En
""los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá
""ser conforme a la letra, o a la interpretación jurídica de
""la ley, y a falta de ésta se fundará en los "principios
""generales del derecho".

"Asimismo, el artículo 402 del Código de
"Procedimientos Civiles para el Distrito Federal prevé lo
"siguiente:

""ART. 402.- Los medios de prueba aportados y
""admitidos, serán valorados en su conjunto por el juzgador,
""atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia.
""En todo caso el tribunal deberá exponer cuidadosamente los
""fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su
""decisión".

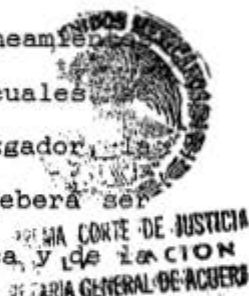
AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"Ahora bien, un precepto de una ley secundaria es "inconstitucional cuando va en contra de alguna disposición "de la ley fundamental o sale de los lineamientos marcados en "ella, lo cual no acontece en el caso que se analiza.


"El artículo 14 constitucional establece que los "juicios deben seguirse ante los tribunales previamente "establecidos, cumpliendo las formalidades del procedimiento "y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

"De conformidad a ese precepto, es facultad del "legislador ordinario fijar las reglas que regirán el "procedimiento, siempre apegadas a las bases y lineamientos "establecidos por la Constitución, entre los cuales "encuentra la valoración de las pruebas por el juzgador, "cual, según el precepto secundario en análisis, deberá ser "en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y de la "experiencia. Esta valoración de las pruebas basadas en las "reglas de la lógica y de la experiencia, no pugna con el "artículo 14 constitucional pues la apreciación de la prueba "es generalmente la actividad intelectual que lleva a cabo el "juez, de acuerdo con el raciocinio, pues el fin de la prueba "es la comprobación de los hechos por parte del juez.

"La prueba generalmente es obra de individuos que "la suministran, la admiten, la instrumentan, la desahogan y "la valoran; luego es imposible aislarla de la persona humana "y, por lo tanto, del mundo psicológico. Cada prueba, cada "hecho del que se deduce la prueba, produce pues, un "movimiento en la conciencia humana, movimiento que varía de "intensidad según los individuos; su experiencia, sus "costumbres, sus capacidades físicas y mentales, su habilidad "práctica, sus opiniones preconcebidas influyen en sus "percepciones, su juicio y su convicción. Por lo tanto, es



AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95



"imposible aislar la valoración de la prueba de la persona humana y por ende, del mundo de la lógica y de la experiencia.

"En efecto, la lógica es indispensable para el correcto razonamiento; para apreciar la prueba es necesario poseer una multitud de reglas, de experiencias sociales, psicológicas, técnicas, entre otras, que juegan un importantísimo papel en esta tarea, porque sin ellas es imposible apreciar la idoneidad, el contenido, la autenticidad, el alcance o credibilidad de las pruebas.


"Estas reglas de apreciación o valoración de la prueba son muy diferentes a las reglas de interpretación de la ley, como es obvio, porque las primeras buscan el verdadero contenido de los medios probatorios allegados al proceso y de los hechos que los constituyen, por lo que es indispensable recurrir a las reglas de la lógica y de la experiencia; en cambio las segundas, o sea, las reglas de interpretación de la ley, sirven para desentrañar la voluntad del legislador expresada en las palabras de la ley. Existe además la diferencia sustancial de que las primeras son concretas, para casos específicos examinados, mientras que las segundas, son abstractas o de carácter general.

"Por otra parte, la tesis que citó el quejoso de rubro: "INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. QUE EN MATERIA CIVIL FACULTE A LOS JUECES A SENTENCIAR CONFORME A SU LEAL SABER Y ENTENDER" no es aplicable al caso que se analiza porque ésta se refiere a que es contrario a la Constitución el ordenamiento que en materia civil faculte a los jueces a resolver conforme a su leal saber y entender y en el caso el artículo 402 en comento no faculta al juez a sentenciar conforme a su leal saber y entender, sino se refiere a la

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"valoración de pruebas que deben realizar los jueces; más
"aún la tesis citada hace la aclaración de que la facultad
"del juzgador de usar de su legal saber y entender, sólo es
"para la apreciación de las pruebas, mas nunca para
"sentencias, pues ésta debe ser apoyada en la ley; lo que
"corroborra lo sostenido en esta ejecutoria.

"En cuanto a la diversa tesis de rubro "PRUEBAS
""RECEPCION DE. INCONSTITUCIONALIDAD" que invocó el quejoso
"tampoco es aplicable en virtud de que ésta se refiere a que
"la recepción de las pruebas jamás debe dejarse por la ley al
"arbitrio del juez, y en el caso en estudio, el multireferido
"artículo 402 no se refiere a la recepción de pruebas, sino
"atañe a la valoración de las pruebas por parte del juzgador,
"cuestión que como ya quedó analizado, no atenta contra
"garantía de audiencia prevista en el artículo 14
"constitucional.



"Por otro lado, tampoco se viola el artículo 16
"constitucional, el cual establece en su parte conducente:
""Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
""domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
""mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y
""motive la causa legal del procedimiento...".

"El artículo 402 del Código Adjetivo Civil no
"contraviene el mencionado precepto constitucional, pues éste
"establece que todo acto de molestia en contra de un
"gobernado debe ser mediante mandamiento escrito de autoridad
"competente que funde y motive la causa legal del
"procedimiento; y el indicado precepto de la ley secundaria
"establece que los medios de prueba aportados y admitidos
"serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a
"las reglas de la lógica y de la experiencia y el tribunal

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la
"valoración jurídica realizada y de su decisión.

"Es decir, que el precepto secundario obliga al
"juzgador a analizar en conjunto las pruebas aportadas al
"proceso y la convicción del juzgador que se ha de formar por
"el engarce y relación de los diferentes datos que lleguen a
"su conocimiento, se exponga en la sentencia, señalando los
"fundamentos de la valoración jurídica realizada sobre la
"base procesal que haya sido válidamente reunida, y con ello
"se cumple el requisito de fundar y motivar la causa legal
"del procedimiento a que se refiere el artículo 16
"constitucional.

"Así también el quejoso impugnó la
"inconstitucionalidad del artículo 140, fracción IV, del
"Código Procesal Civil sosteniendo que el artículo 14
"constitucional establece sin restricción la posibilidad de
"los particulares defenderse en el juicio y no permite
"límites ni una sanción pecuniaria al particular que ha
"participado en el mismo.

"Es infundado el anterior argumento.

"Al respecto, es menester transcribir el artículo
"140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para
"el Distrito Federal, el cual establece:

"ART. 140.- La condenación en costas se hará
"cuando así lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del juez,
"se haya procedido con temeridad o mala fe.- Siempre serán
"condenados: IV.- El que fuere condenado por dos
"sentencias conformes de toda conformidad de su parte
"resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre
"costas. En este caso, la "condenación comprenderá las
"costas de ambas instancias..."

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"Ahora bien, el artículo 14 constitucional no
"prohíbe la condena en costas y sí señala que los juicios
"deben seguirse ante tribunales previamente establecidos,
"cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, y
"conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

"De acuerdo con lo anterior, en dicho precepto
"fundamental se establece la facultad del legislador
"ordinario para fijar las reglas que regirán el
"procedimiento, siempre apegadas a las base y lineamientos
"establecidos por el Constituyente, entre las cuales,
"lógicamente se encuentra la condena de pago de costas al
"perdidoso del juicio o a quien litigue con mala fe; la
"simple circunstancia de que el artículo 14 constitucional o
"cualquier otro precepto de la propia Carta Magna no
"establezca expresamente que puede sancionarse a un
"particular que resulta condenado en un proceso civil,
"provoca en sí mismo la inconstitucionalidad del precepto que
"la disponga, pues, como ya se dijo, el vicio referido lo
"tiene un precepto cuando va en contra de alguna disposición
"de la Carta Magna, lo cual no acontece en el caso concreto.

"Cabe señalar, que si bien es verdad que el
"artículo 14 constitucional no prevé expresamente la
"posibilidad de sancionar a un particular que resulte vencido
"en un juicio del orden civil, también lo es que no existe
"prohibición expresa de la propia Constitución para ello, por
"lo que debe estimarse autorizado, ya que si el Constituyente
"hubiese querido que no se sancionara al litigante que
"resultare vencido en dos sentencias conforme de toda
"conformidad a que hubiese litigado con mala fe, lo hubiera
"establecido en algún precepto constitucional; como por
"ejemplo lo hizo en el artículo 17, el cual establece que

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95



"nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil; en el artículo 22 de la Carta Magna que prohíbe las penas de mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva y la confiscación de bienes; etcétera; por lo que si en el artículo 14 constitucional o en algún otro de la propia Carta Magna no hay disposición que expresamente prohíba la imposición de la medida que se combate, resulta infundado lo alegado por la quejosa.

"Así también, es pertinente señalar que el constituyente no podía prever ni abarcar todos los supuestos que se presentarían dentro de la impartición de justicia; por ello, sólo dio los principios y bases generales sobre los cuales se deberían ajustar las leyes secundarias, mismas que tendrían el objeto de desarrollar y complementar esas bases y principios jurídicos, empero sin contravenirlos ni salirse de los lineamientos marcados por ellos.

"En cuanto a que el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, limita el derecho de un particular para defenderse, cabe señalar que resulta infundada tal afirmación toda vez que no se trata de ninguna limitación, puesto que no le resta la posibilidad de oponer defensas, excepciones, de ofrecer pruebas o de interponer recursos; ni se redujeron plazos o términos judiciales para ejercerlos, lo cual sí constituiría una limitación al derecho de defensa; sino que lo único que se pretende con las sanciones previstas en el precepto en comento, es que quien litigue en defensa de sus derechos lo haga en forma consciente y de buena fe; por ello se prevé la sanción para quien, con el pretexto de la defensa, litigue de mala fe o pretenda retardar la impartición de justicia; por esto último en

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"perjuicio del interés social, ya que a la sociedad le
"interesa que la impartición de la justicia sea pronta y
"expedita.

"El anterior criterio lo sostuvo este Octavo
"Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al
"resolver el amparo directo número 99/93, promovido por
"Virginia Salazar Martínez, resuelto en sesión de cuatro de
"marzo de mil novecientos noventa y tres, y respecto del cual
"se sustentó la tesis número 1, 8o. C. 11, publicada en el
"Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI
"mayo del mencionado año, página trescientos trece, cuyo
"texto expresa:

""COSTAS JUDICIALES. LA CONDENA RESPECTIVA
""PERMITIDA POR EL ARTICULO 140, FRACCION IV, DEL CODIGO DE
""PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA
""EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL.- El artículo
""Constitucional no prohíbe la condena en costas y sí señala
""que los juicios deben seguirse ante tribunales previamente
""establecidos, cumpliendo las formalidades esenciales del
""procedimiento, y "conforme a las leyes expedidas con
""anterioridad al hecho". De acuerdo con lo anterior, en
""dicho precepto fundamental se establece la facultad del
""legislador ordinario para fijar las reglas que regirán el
""procedimiento, siempre apegadas a las bases y lineamientos
""establecidos por el Constituyente, entre las cuales,
""lógicamente se encuentra la condena de pago de costas al
""perdidoso o a quien litigue de mala fe; la simple
""circunstancia de que el artículo 14 constitucional, o
""cualquier otro precepto de la propia Carta Magna no
""establezca expresamente que pueda sancionarse a un
""particular que resulte condenado en un proceso civil, no

ESTADOS M
SUPREMA CORTE
DE LA N
SECRETARIA GENERAL

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

""provoca en sí mismo la inconstitucionalidad del precepto
 ""que la disponga, pues, el vicio referido lo tiene un
 ""precepto cuando va en contra de alguna disposición de dicha
 ""Carta Magna, o bien cuando sale de los lineamientos
 ""marcados en ella, pero no por no estar previsto su
 ""contenido en un precepto constitucional. De tal manera que,
 ""si bien es verdad que el artículo 14 constitucional no
 ""prevé expresamente la posibilidad de sancionar a un
 ""particular que resulte vencido en un juicio del orden
 ""civil, también lo es que no existe prohibición expresa de
 ""la propia Constitución para ello, por lo que debe estimarse
 ""autorizado, ya que si el Constituyente hubiese querido que
 ""no se sancionara al litigante que resultare vencido en dos
 ""sentencias conformes de toda conformidad, lo hubiera
 ""establecido en algún precepto constitucional, como por
 ""ejemplo lo hizo en el artículo 17, en el cual establece que
 ""nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter
 ""puramente civil o como el artículo 22 que prohíbe las penas
 ""de mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos,
 ""el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la
 ""confiscación de bienes, etcétera; por lo que si en el
 ""artículo 14 constitucional o en algún otro de la propia
 ""Constitución General de la República no hay disposición que
 ""expresamente prohíba la imposición de la condena en costas,
 ""resulta legal la imposición de tal medida".

"En cuanto al argumento consistente en que el
 "aludido artículo 140, fracción IV, pugna con el artículo 14
 "constitucional porque ninguna autoridad puede ordenar la
 "privación de sus posesiones o derechos sin previo juicio,
 "donde se cumplan las formalidades esenciales del
 "procedimiento; por lo que no puede haber fundamentación ni

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"motivación como lo exige el artículo 16 constitucional,
"también se estima infundado.

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo
"140, fracción IV, en estudio ya transcrito, debe condenarse
"en costas al que fuere condenado por dos sentencias
"conformes de toda conformidad en su parte resolutive, sin
"tomar en cuenta la declaración sobre costas.

"Lo anterior implica que, para poder aplicar dicho
"precepto a alguna persona, es presupuesto indispensable: I.-
"Que exista un juicio en que el afectado sea parte; II.- Que
"en dicho juicio se dicte una sentencia condenatoria en su
"contra; III.- Que el afectado haga valer el recurso
"correspondiente y IV.- Que en la resolución que se emita
"recurso, se confirme en todos sus resolutivos la sentencia
"recurrida.

"Por lo anterior, es innecesario que antes de
"aplicar el precepto en comento al condenado en dos
"sentencias, conformes de toda conformidad, tenga que ser
"oído y vencido en un procedimiento especial, cuando que, si
"ya ha sido oído y vencido en juicio, la aplicación del
"precepto citado es consecuencia de su comportamiento en el
"juicio que fue oído.

"En tal virtud, el numeral en comento no transgrede
"la garantía de audiencia toda vez que su aplicación deriva
"precisamente de un procedimiento en que se otorgó dicha
"garantía al perdidoso en dos instancias.

"Sirve de apoyo, aplicada por analogía, la tesis
"número cuarenta y cinco, visible a fojas seiscientos nueve,
"Primera Parte, Pleno, del Informe de Labores de mil
"novecientos ochenta y nueve, que dice:



AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

""COSTAS, EL ARTICULO 140, FRACCION IV, DEL CODIGO
""DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE
""ESTABLECE LA CONDENA EN ELLAS, NO VIOLA LA GARANTIA DE
""AUDIENCIA.- De conformidad con el precepto antes mencionado
""procede condenar el pago de costas en ambas instancias al
""que haya sido condenado por dos sentencias conformes de
""toda conformidad en su parte resolutive, sin tomar en
""cuenta la declaración sobre costas. Esto significa que para
""que se le pueda aplicar dicho precepto a alguien, es
""presupuesto indispensable: A) La existencia de un juicio en
""el que se sea parte, B) que en dicho juicio se dicte una
""sentencia condenatoria en su contra, C) que él haga valer
""el recurso legal correspondiente y D) que en la resolución
""que resuelva el recurso se confirme en todos sus
""resolutivos la sentencia de primera instancia. Por ello, es
""innecesario que antes de aplicarle el precepto al condenado
""en dos sentencias conformes de toda conformidad, tenga que
""ser oído y vencido en un procedimiento especial, porque su
""aplicación es consecuencia de su comportamiento en un
""juicio en el que se otorgó la garantía de audiencia. De ahí
""que el artículo 140, fracción IV, del Código de
""Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no viola la
""garantía de audiencia prevista en el segundo párrafo del
""artículo 14 constitucional".

"El quejoso aduce por otro parte, que el citado
"artículo 140, fracción IV, es inconstitucional pues pugna
"con el contenido del artículo 17 Constitucional, ya que este
"precepto señala con claridad que toda persona tiene derecho
"a que se le administre justicia por tribunales que deben
"estar expeditos para impartirla en los plazos y términos que
"fijen las leyes, emitiendo una resolución de manera pronta,

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"completa e imparcial, estableciendo con claridad que dicho
"servicio es gratuito, quedando en consecuencia prohibidas
"las costas judiciales, y que en el aludido artículo 140,
"fracción IV, permite la imposición y cobro de costas en
"perjuicio de los litigantes que intervinieron en el juicio
"porque señala una condenación en costas por diversas
"hipótesis que hayan existido en el procedimiento.

"Es infundado el anterior argumento.


"El artículo 17 constitucional establece: "ART.17.-

""...Toda persona tiene derecho a que se le administre
""justicia por tribunales que estarán expeditos para
""impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,
""emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e
""imparcial. Su servicio será gratuito, quedando,
""consecuencia, prohibidas "las costas judiciales".

"El artículo 17 de la Constitución General de la República, establece en la parte transcrita, el derecho de los gobernados de obtener que el Estado les administre "justicia" de manera pronta, expedita, completa, imparcial y gratuita, agregando como consecuencia lógica que quedan prohibidas las costas judiciales, lo cual sólo puede interpretarse como la prohibición de que los tribunales cobren honorarios por realizar la función jurisdiccional que se les ha encomendado, pero el dispositivo constitucional no se refiere al pago de gastos y costas entre las partes que es el punto regulado por el artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal cuya constitucionalidad se cuestiona.

"La anterior interpretación se confirma si se advierte que el precepto de mérito fue aprobado sin discusión por el Congreso Constituyente de mil novecientos

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

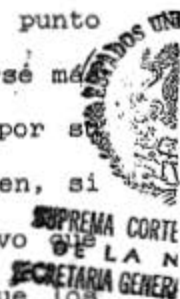


"dieciséis en sesión celebrada el día veinte de diciembre de
"ese año, reproduciendo el artículo 17 de la Constitución de
"mil ochocientos cincuenta y siete cuyo texto aclaró y
"mejoró. Ahora bien, una consulta al Diario de Debates del
"Constituyente de mil ochocientos cincuenta y seis (en el que
"sí se generó discusión al respecto), lleva a la conclusión
"antes apuntada en el sentido de que el dispositivo
"constitucional se refiere exclusivamente a la prohibición de
"que los tribunales cobren por administrar justicia, no a que
"las partes puedan ser condenadas a pagarse entre ellas
"gastos y costas, debido a su actuación procesal, como
"indebidamente lo pretende la quejosa.

"En la sesión celebrada el veintiséis de enero de
mil novecientos ochocientos cincuenta y siete se debatió el
punto de la siguiente manera: "La Comisión de Constitución
""presentó un dictamen consultando que la adición de muchos
""diputados, que pidieron la abolición de las costas
""judiciales, pasara a la comisión de Ley Orgánica de
""Justicia. El señor Zarco se opuso al dictamen, diciendo
""que se quería esquivar otra cuestión, retirar otro
""artículo, empujar indefinidamente todo bien para el
""pueblo, porque, aunque se ha nombrado una comisión para
""presentar la Ley Orgánica de Justicia, nada ha hecho, ni
""nada hará, y, aunque hiciera, no queda tiempo para discutir
""su proyecto.- Los autores de la adición han querido que no
""se venda la justicia, que su administración sea enteramente
""gratuita, y han creído que este principio debía ser
""consignado en un artículo de la Constitución, porque afecta
""a los derechos del hombre y a las garantías individuales.
""La comisión debió resolver de una manera categórica en pro
""de la adición, si participa en estas ideas, o en contra, si

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

""la arrendaron las dificultades de la hacienda pública y la
""consideración de que no están bien pagados los jueces y los
""magistrados.- Triste es que el pueblo, a quien se llama
""soberano, contribuyendo a todas las cargas públicas, tenga
""que comprar la justicia como compra la gracia, los
""sacramentos y la sepultura.- Ya que el Congreso en el acto
""de derechos deja al pueblo la horca porque no hay hacienda,
""librelo al menos de las costas judiciales y haga que el
""derecho y la justicia dejen de ser mercancías. El señor
""Arriaga dice que abunda en las ideas del preopinante y nada
""tiene que contestar a sus razones; pero que la comisión de
""la Constitución creyó que no se trataba de un punto
""capital, sino de una mejora que bien puede conseguirse más
""tarde por medio de una ley secundaria. Añadió que por su
""parte no había inconveniente en modificar el dictamen, si
""así lo deseaba el Congreso.- El señor Moreno sostuvo que
""la administración de justicia debe ser gratuita y que los
""magistrados deben ser pagados por el Erario y no por los
""litigantes.- El señor Banuet, declarando que no es juez ni
""magistrado, sino litigante que paga derechos, opina que la
""abolición de las costas judiciales, mientras no se asegure
""el puntual pago de los jueces, equivale a poner en subasta
""pública la administración de justicia, por qué, en verdad,
""hombres que estén reducidos a la miseria y carezcan de todo
""recurso para subsistencia, necesitan ser héroes para ser
""íntegros.- El señor Anaya Hermosillo ataca vigorosamente el
""dictamen pintando los abusos del cobro de costas, que raya
""en el exceso cuando hay jueces que no tienen asignado
""ningún sueldo y viven exclusivamente de lo que cobran a los
""litigantes, opina que los jueces deben ser pagados como lo
""permitan las circunstancias del Erario y severamente



AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95



DE JUSTICIA
ACION
DE AQUE

""castigados los que falten a su deber.- El señor Zarco cree
""inútil insistir en la cuestión, cuando la comisión, por
""medio del señor Arriaga, ha declarado que no tiene nada que
""contestar.- La mejora que no se reclama debe ser punto
""constitucional, y así lo comprendieron los señores de la
""Comisión que suscribieron la adición de que se trata.
""Suponer que la poca puntualidad en los sueldos equivalga a
""poner en subasta pública la administración de justicia, es
""hacer una gratuita ofensa a la magistratura de la
""República, que tiene la gloria de haber visto vivir y morir
""en la miseria a Figueroa y a don Juan B. Morales, sin que
""faltaran jamás a su deber. Si la razón del señor Banuet ha
""de mantener las costas judiciales, sería preciso establecer
""costas administrativas, costas parlamentarias, etc., porque
""todos los funcionarios están mal pagados y no es
""conveniente poner en subasta pública la fidelidad de los
""empleados, la conciencia de los diputados, la lealtad de
""los militares.- El dictamen aprobado.- Puesta a discusión
""la adición que consulta la abolición de las costas
""judiciales, se apoya con muy buenas razones el señor
""Degollado (don Joaquín), quien opina que mientras no sea
""gratuita la administración de justicia, no se habrá
""conseguido el objeto de la asociación. Hace notar también
""que no obstante que ahora hay sueldos para los magistrados
""y extorsiones para los litigantes, hay quejas contra la
""Corte de Justicia y contra el último juzgado, de manera que
""no son las costas lo que da integridad a los jueces.- El
""señor Mata cree que la generalidad en que está concebida la
""adición hace que se extienda a los tribunales de los
""estados, y opina que esto es atacar la soberanía que para
""su régimen interior les concede el sistema federal.- El

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

""señor García Granados dice que precisamente los autores de
""la adición quieren que no haya costas en ningún tribunal de
""la República, incluso los de los estados, y hasta en los
""juzgados eclesiásticos. El señor Mariscal desea que la
""cuestión se examine de una manera práctica, puesto que no
""es menester probar lo que todo el mundo siente.- Lo que
""debe verse es, si atendido el estado de hacienda, es
""posible alcanzar la reforma que se desea.- Hace notar que
""en ningún país se han abolido completamente las costas
""judiciales.- El señor Ramírez (don Ignacio) distingue entre
""la cuestión especulativa y de principios, y la de práctica
""y de administración. Al Congreso toca resolver la primera y
""dejar la segunda al gobierno o a los poderes
""constitucionales.- Se ha dicho siempre que los gobiernos
""son un mal necesario que se sostienen por la ventaja que
""resulta de la buena administración de justicia.- Si
""sociedad paga al gobierno, ¿por qué ha de tener que comprar
""la justicia?. El pago de costas es absurdo, es abusivo, es
""un contraprincipio insostenible.- El señor Moreno dice que,
""si otros países no han abolido las costas judiciales, ésta
""no es razón para mantenerlas en México.- En otras partes
""subsiste la prisión por deudas, mientras que en México no
""existe esta pena.- La adición queda aprobada por 66 votos
""contra 15, (cita tomada de la obra "Los Derechos del Pueblo
""Mexicano, México a través de sus Constituciones", Segunda
""Edición, Tomo IV, antecedentes y evolución de los artículos
""16 a 27 Constitucionales, páginas de la setenta y dos a la
""setenta y cuatro, Congreso de la Unión, Cámara de
""Diputados, Legislatura, México, mil novecientos setenta y
""ocho)".

SECRETARIA

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95



"De lo anterior, se advierte que al discutirse el
 "texto constitucional de referencia se tuvieron en cuenta
 "razones similares a las expresadas, es decir, que los
 "tribunales administren justicia gratuitamente sin cobrar
 "costas por las funciones que realizan, pero de ninguna
 "manera que tal prohibición se extiende a los gastos y costas
 "que la parte perdedora en una contienda jurisdiccional debe
 "cubrir en favor de su contraparte a título de resarcimiento
 "por las erogaciones que tuvo que realizar para atender
 "debidamente el juicio y atendiendo a que esta actuación en
 "el juicio haya sido de mala fe o con el propósito de
 "entorpecer la administración de justicia; por lo que, es
 "claro que se trata de cuestiones diversas y no como
 "incorrectamente lo pretende la quejosa.

"De acuerdo a lo anterior, es claro que el artículo
 "140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, no
 "es violatorio del artículo 17 constitucional.

"Sirve de apoyo, la tesis de Pleno de la Suprema
 "Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas diecinueve y
 "veinte, Tomo IV, Enero-Junio de mil novecientos noventa,
 "Primera Parte, Octava Epoca del Semanario Judicial de la
 "Federación, que dice:

"COSTAS JUDICIALES. LA CONDENA RESPECTIVA,
 "PERMITIDA POR EL ARTICULO 140, FRACCION IV, DEL CODIGO DE
 "PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL
 "ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.- El artículo 140, fracción IV,
 "del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
 "Federal, no contraviene lo dispuesto por el artículo 17
 "constitucional al permitir que los tribunales condenen a
 "una de las partes al pago de las costas judiciales a su
 "contraparte, toda vez que lo que la disposición



SECRETARÍA DE JUSTICIA
 Y FERIA

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

""constitucional prohíbe es que se cobre por el servicio de
""impartición de justicia, el cual debe ser gratuito,
""cuestión diversa que no puede confundirse con la condena en
""costas regulada por el artículo procesal de referencia".

CUARTO.- Inconforme con la anterior determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el que fue admitido por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de veinte de abril de mil novecientos noventa y cinco.

QUINTO.- El Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción solicitó en su pedimento número II/72/95 veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco confirme la resolución recurrida y se niegue el amparo quejosa.

El asunto fue turnado al señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, por acuerdo de tres de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 fracción V y 84 fracción II, de la Ley de Amparo, y 10, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

Acuerdo Plenario 1/1995, punto primero de siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco.

Es aplicable lo decidido por el Tribunal Pleno en la tesis publicada en la página veinticinco, primera parte, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"FACULTADES EXTRAORDINARIAS, COMPETENCIA DEL PLENO PARA
 "CONOCER DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ORDENAMIENTOS EXPEDIDOS
 "POR EL EJECUTIVO FEDERAL EN USO DE. DELEGADAS POR EL
 "CONGRESO DE LA UNION.- Los cuerpos legales expedidos por el
 "Ejecutivo Federal en uso de facultades extraordinarias
 "concedidas a su favor por el Congreso de la Unión tienen la
 "misma naturaleza y jerarquía que las leyes ordinarias, pues
 "respecto de ellas el Ejecutivo actúa como órgano legislativo
 "en sustitución y con autorización del Congreso citado y, por
 "tanto, compete al Pleno, en grado de revisión, el
 "conocimiento de los juicios de amparo enderezados contra
 "ellos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84,
 "fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y 11, fracción V.
 "inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
 "Federación, y no a las Salas de la Suprema Corte de Justicia
 "de la Nación, porque dichos cuerpos legales no tienen el
 "carácter de reglamentos expedidos por el Ejecutivo en uso de
 "la facultad reglamentaria".

SEGUNDO.- El presente recurso de revisión es procedente de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, 83, fracción V, y 84, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que se interpuso

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565 5

en contra de una sentencia pronunciada por un Tribunal, Colegiado de Circuito, en un juicio de amparo directo, en la cual se decidió sobre la constitucionalidad de una ley expedida por el Presidente de la República en uso de facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso de la Unión, como lo es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, concretamente respecto de los artículos 140, fracción I y 402, y en el recurso subsiste el problema de constitucionalidad, ya que si bien existe jurisprudencia en relación del primero de los preceptos citados, tocante del segundo no la hay.

TERCERO.- En el escrito de revisión citado la recurrente hizo valer los siguientes agravios:

"I.- PARTE DE LA SENTENCIA QUE LO CAUSA:

"El considerando séptimo, en relación con los resolutivos primero y segundo, que en obvio de repeticiones inútiles e innecesarias se da aquí como reproducido, como si se insertase a la letra:

"DERECHO INDEBIDAMENTE APLICADO:

"Artículos 140, fracción IV 402 del Código de Procedimientos Civiles, así como las tesis de jurisprudencia citadas.

"DERECHO QUE DEBIO APLICARSE:

"Artículos 14, 17 constitucional, 10., 44, 77, 158, 184 y 190 correctamente de la Ley de Amparo, así como las tesis de jurisprudencia que más adelante se invocarán.

"La sentencia que se impugna causa agravio a esta parte recurrente, en virtud, de que el juez Federal (sic) viola el artículo 77 de la Ley de la Materia, al no hacer un

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

debida fijación, estudio y apreciación de la inconstitucionalidad planteada, independientemente que sus argumentos resultan ser del todo subjetivos y dogmáticos, carentes de apoyo jurídico, como se pasa a demostrar:

"En principio se combaten los argumentos vertidos por dicho tribunal colegiado, respecto a la inconstitucionalidad del artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

"El Tribunal Colegiado que dictó la resolución que se combate realiza una interpretación subjetiva y doctrinal, carente de apoyo jurídico explicando lo que a su parecer establecen tanto el artículo 14 constitucional, como el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles, tergiversando sin fundamento dichos preceptos, ya que si bien es cierto, que el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles se refiere a una valoración de pruebas, también es cierto, que dicha valoración forzosa y necesariamente la deben realizar el juez en la sentencia y así las cosas, no se permite constitucionalmente efectuar una valoración atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, como inconstitucionalmente lo permite y preceptúa el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles.

"En ninguna etapa, sino única y exclusivamente en la sentencia definitiva, un juez puede realizar la valoración de las pruebas y por ello todo acto que se efectúe en la sentencia, debe adecuarse o lo que establece con claridad el artículo 14 constitucional, que exige que la sentencia definitiva, toda en su contenido, debe ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley



RTE DE JUSTICIA
N.º ON
FOLIO DE ACUERDO

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"y a falta de ésta se fundará en los principios generales del
"derecho.

"En efecto, el Tribunal Colegiado que estudió la
"inconstitucionalidad planteada, sin fundamento ni motivo, se
"permitió hacer una distinción entre el artículo 14
"constitucional y el artículo 402 del Código de
"Procedimientos Civiles que se tildó de inconstitucional, a
"este respecto debe decirse que debe prevalecer la norma
"constitucional y que en su artículo 14, no permite hacer
"distinciones y debe aplicarse el principio general del
"derecho, que reza: "Donde la ley no distingue, no debemos
"distinguir", en otras palabras el precepto constitucional
"señalado, se refiere sin distingos a la sentencia
"definitiva de un juicio civil y si en esa sentencia se
"realiza una valoración de pruebas, ésta no puede hacerse
"conforme a las reglas de la lógica y la experiencia, ya que
"la Constitución en su artículo 14, no lo permite y ordena
"que la sentencia debe ser conforme a la letra o a la
"interpretación jurídica o en su defecto en los principios
"generales del derecho.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARIA GENERAL

"Asimismo es menester señalar que las
"manifestaciones vertidas por el tribunal respecto al "mundo
"psicológico" y "mundo de la lógica y la experiencia"
"resultan ser apreciaciones puramente doctrinales, no
"aplicables al momento de decidir una cuestión jurídica, en
"razón de que al sentenciar se busca el verdadero contenido
"del medio probatorio ofrecido por las partes y los hechos
"que lo constituyen, de ahí que dicho artículo cuestionado va
"en contra del artículo 14 constitucional y por ende incurre
"en ilegalidad.

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"En este orden de ideas, se desprende que la "sentencia impugnada viene a contener una serie de "apreciaciones carentes de base legal, ya que pretende "separar la valoración de las pruebas que se da "necesariamente en la sentencia definitiva de un "procedimiento judicial, argumentando que se trata de dos "supuestos diversos confundiendo una acción, con un acto "procesal o actuación, esto corrobora la falta de fundamento "y consistencia jurídica de la sentencia impugnada.

"Por lo que hace al argumento del Tribunal "Colegiado en el sentido de que las tesis invocadas en "nuestro caso en particular con los rubros: ""INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. QUE EN MATERIA CIVIL ""FACULTE A LOS JUECES A SENTENCIAR CONFORME A SU LEAL SABER ""Y ENTENDER" Y "PRUEBAS RECEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD" "debe decirse que esto es falso, ya que cabría hacer la "pregunta ¿En qué procedimiento se realiza la valoración de "las pruebas, fuera de la sentencia?.

"La respuesta es, en ninguno, ya que en nuestro "sistema judicial toda la valoración de las pruebas se "efectúa en los considerandos de la sentencia y por ello toda "sentencia debe dictarse conforme a los lineamientos "señalados en el artículo 14 constitucional, el cual no "permite que se valoren las pruebas y con ello se dicten las "sentencias conforme a las reglas de la lógica y la "experiencia, razones que permiten establecer que el artículo "402 del Código de Procedimientos Civiles es "inconstitucional.

"Evidente es, que la sentencia definitiva se dirige "a desechar o acoger las pretensiones de los particulares "litigantes, a través de la valoración de las pruebas y es




DE JUSTICIA
ACION
AL D. JUECES

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"hasta esa etapa en la que el juez analiza el caudal
"probatorio, fase resolutoria del juicio, que se integra con
"una sola actuación judicial, conducta que se da en la
"sentencia, la que debe dictarse en cumplimiento al artículo
"14 constitucional, que no permite que dicha sentencia, que
"implica necesariamente la valoración de las pruebas se dicte
"conforme a las reglas de la lógica y la experiencia y al
"permitirlo así el artículo 402 del Código de Procedimientos
"Civiles, va en contra de una manera directa del artículo 14
"constitucional.

"En vista de lo anterior, las tesis de
"jurisprudencias invocadas si son aplicables al presente
"caso, ya que se pretende separar la valoración, de
"sentencia, siendo que son parte de un mismo acto procesal
"del juez por ello las tesis corroboran la
"inconstitucionalidad del artículo 402 del Código de
"Procedimientos Civiles.



"Por todo lo anterior manifestado, se demuestra el
"ilegal actuar en que incurrió el a quo, ya que infringe los
"artículos 77, 192 y 196 de la Ley de la Materia, al no hacer
"un debido estudio, fijación y apreciación de la demanda de
"amparo, dando por consecuencia una resolución a todas luces
"ilegal y errónea, siendo procedente que esa Superioridad
"decrete la inconstitucionalidad del artículo 402 del Código
"de Procedimientos Civiles, al igual que el referido
"ordenamiento.

"Continúa el tribunal colegiado en el considerando
"transcrito, resolver (sic) la diversa inconstitucionalidad
"del artículo 140 fracción IV, del Código de Procedimientos
"Civiles, manifestando que mis argumentos son infundados; en
"primer término debe decirse que la autoridad que resolvió el

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95



"amparo y que decidió sobre la constitucionalidad del artículo 140 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles, se abstiene de hacer un estudio íntegro y completo de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, ya que si bien es cierto que pretende señalar en el considerando que se impugna lo planteado por el quejoso, también lo es que no da contestación debida a dichos conceptos, porque se concreta a realizar una apreciación dogmática carente de apoyo jurídico, ya que no existe precepto legal que corrobore su dicho y deja de aplicar correctamente el artículo 14 constitucional ya que no resuelve conforme a derecho, pues contrario a su decir el precepto constitucional no señala en ninguna de sus partes; "el caso o la posibilidad de imponer una sanción o pago de costas a la parte que es vencida en un juicio", y esta posibilidad de defensa la otorga nuestra Constitución de una manera irrestricta, sin limitaciones y sin ningún gravamen o imposición, por lo que la autoridad que dicta el considerando efectúa una interpretación errónea, doctrinaria, unilateral y carente de consistencia jurídica del precepto constitucional señalado.

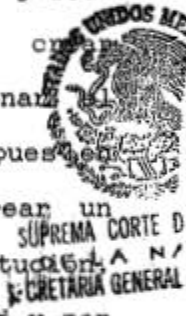
En efecto, contrario a lo argumentado por el tribunal colegiado del conocimiento, nuestra Constitución no prevé en ninguno de sus artículos la mínima posibilidad de sancionar a un particular que resulte vencido en juicio, por ende no puede estimarse ni llegarse a la errónea conclusión que por no existir prohibición expresa en la Carta Magna esté permitido, tanto más que todos y cada uno de los preceptos constitucionales son claros y precisos en cuanto a las disposiciones y supuestos vertidos por el Constituyente, por lo tanto ninguna ley ordinaria puede desarrollar,

JUSTICIA
CION
E ACUERD

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"complementar y rebasar los lineamientos establecidos por
"nuestra constitución y en especial lo dispuesto por el
"artículo 14 de nuestra Carta Magna, ya que en caso contrario
"incurre en inconstitucionalidad.

"Lo anterior es así, porque las leyes secundarias u
"ordinarias deben estar apegadas a las bases y lineamientos
"establecidos por nuestra Constitución General de la
"República sin rebasarlas, en este orden de ideas se
"desprende que al no existir en ningún precepto
"constitucional el supuesto, la hipótesis de sancionar en
"costas a un particular que resulte condenado en un juicio
"civil, no puede la ley ordinaria por sí sola crear
"instituciones nuevas, ni pueden ampliar o adicionar el
"contenido substancial de la norma constitucional, pues
"caso contrario esa ley ordinaria que venga a crear un
"contenido normativo nuevo opuesto a nuestra Constitución
"resulta ser un exceso y abuso del uso de esa facultad y por
"lo tanto al ir en contra de lo dispuesto por el artículo 14
"constitucional resulta a todas luces ilegal e
"inconstitucional.



"Asimismo se señala a esta Superioridad, que el
"Tribunal Colegiado del conocimiento invoca un criterio
"sustentado por dicho tribunal, el cual no obliga a que sea
"obligatorio ni aplicable al caso en particular, al
"demostrarse claramente que sus argumentos resultan
"infundados y carentes de consistencia jurídica, ya que es
"notoria la violación de los preceptos constitucionales
"invocados, se reitera que tal tribunal estaba obligado a
"hacer un estudio íntegro y completo del concepto de
"violación esgrimido por la parte quejosa y no basarse en un



AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"criterio sostenido por dicho tribunal el cual como ya se
"dijo no es aplicable, ni obligatorio.

"Es menester señalar que el tribunal colegiado no
"señala el precepto constitucional que le permita resolver
"una cuestión jurídica, por tanto lo dicho en el considerando
"carece de toda fundamentación y motivación y demuestra la
"ilegalidad con que se conduce la autoridad que resolvió el
"amparo, porque guió su sentencia fuera de los lineamientos
"legales señalados en los artículos 14 y 16 constitucionales,
"que exigen una debida fundamentación y una aplicación
"estricta de la ley y en este orden de ideas ninguno de los
"dos preceptos autoriza a resolver como lo hizo el tribunal
"colegiado, es decir sin argumentos y bases jurídicas
"consistentes, tanto más que el precepto constitucional
"invocado no señala la posibilidad u obligación de pagar las
"costas por virtud de sentencia que condene a una de las
"partes, dando como resultado que los argumentos resulten
"infundados e inoperantes a nuestro caso en particular;
"asimismo se reitera que dicho razonamientos no tienen
"fundamento alguno siendo los mismos inoperantes.

"Por otra parte, se reitera que contrario a lo
"argumentado por dicho Tribunal, el artículo 140 fracción IV
"del Código de Procedimientos Civiles, si es contrario al
"artículo 14 constitucional, ya que se excede al establecer
"la condena en costas en contra de alguno de los litigantes,
"ya que como se dijo la norma constitucional no contempla la
"posibilidad en ningún caso de condenar en costas, lo que sin
"lugar a dudas constituye una sanción en perjuicio de los
"particulares, por el hecho de haber sido parte en un juicio
"y la autoridad no señala en qué párrafo del artículo 14
"constitucional, se establece la posibilidad de hacer una

JUSTICIA
ION
E ACUER

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"condena en costas, tampoco se dice que éstas se funden en el
"hecho del vencimiento y si bien es cierto se siguió el
"juicio ante los tribunales previamente establecidos, también
"lo es que el artículo 14 constitucional, no permite que
"exista una consecuencia de carácter pecuniario en perjuicio
"de alguna de las partes litigantes y así las cosas es
"evidente que el artículo 140 del Código de Procedimientos
"Civiles sí es inconstitucional.

"Es evidente que toda imposición pecuniaria es una
"sanción, como la que establece el artículo 140 del Código de
"Procedimientos Civiles, sin embargo no está a discusión si es
"o no sanción, no se trata de definir las costas como lo hace
"el Tribunal Colegiado para sostener la constitucionalidad de
"dicho precepto, el punto fundamental de carácter
"interpretativo de la Constitución, es determinar en que
"artículo de dicho ordenamiento se establece la posibilidad
"para que se impongan costas en perjuicio de las partes que
"intervienen en un juicio, así las cosas y al demostrarse lo
"inconstitucionalidad de dicho artículo debe revocarse el
"considerando transcrito.

PREMIER PRESIDENTE
SECRETARIO GENERAL

"De igual manera el considerando cuestionado viola
"el artículo 14 constitucional y fundamentalmente la litis
"planteada en el juicio de amparo, donde se dijo que el
"artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles es
"contrario al artículo 14 constitucional y de la
"transcripción hecha anteriormente, se desprende con claridad
"que el Tribunal Colegiado que dictó la resolución no hizo
"ningún análisis jurídico de la violación alegada y se
"concretó a interpretar a su manera el precepto tildado de
"inconstitucionalidad, argumentando que no es contrario a la
"Carta Magna, por lo que este hecho es suficiente para



AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"revocar el considerando transcrito y entrar al análisis de
"los conceptos de violación que omitió estudiar el Tribunal
"Colegiado.

"De todas las razones apuntadas resulta procedente
"que se declare la inconstitucionalidad del artículo
"indicado.

"El considerando transcrito de igual manera viola
"el artículo 17 constitucional, ya que este precepto señala
"con claridad que toda persona tiene derecho a que se le
"administre justicia por tribunales que deben estar expeditos
"para impartirla en los plazos y términos que fijen las
"leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e
"imparcial, preceptuando con claridad que dicho servicio es
"gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas
"judiciales.

"Es evidente que el artículo 140 fracción IV del
"Código de Procedimientos Civiles va en contra de una manera
"directa del artículo 17 constitucional, ya que permite la
"imposición y cobro de costas en perjuicio de los litigantes
"que intervinieron en el juicio, porque señala una
"condenación en costas para diversas hipótesis que hayan
"existido en el procedimiento y como ya se dijo el precepto
"constitucional que motiva este agravio no hace ningún
"distingo, sino que lisa y llanamente prohíbe las costas
"judiciales, lo que hace patente la violación directa
"existente del artículo 140 fracción IV del Código de
"Procedimientos Civiles.

"En efecto el precepto antes señalado ordena y
"permite la imposición de costas judiciales en perjuicio de
"alguna de las partes en el proceso, situación contraria y no
"permitida por el artículo 17 constitucional y la autoridad

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

JUSTICIA
ION
ACUER

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"que resolvió el amparo analiza esta violación alegada en los
"conceptos de violación, únicamente a la luz del Diario de
"Debates del Constituyente de 1857, sin tomar en
"consideración que tal disposición constitucional no hace
"dicha distinción alguna, ya que si el Constituyente hubiese
"querido únicamente la prohibición de que los tribunales
"cobren por administrar justicia, lo hubiese establecido en
"dicho precepto, por lo que si no hay disposición expresa de
"lo alegado, resulta infundado lo esgrimido por la juzgadora.

"Lo anterior es así, ya que el Constituyente no
"podía prever ni abarcar todos los supuestos derivados de la
"impartición de justicia, por ello sólo dio las bases,
"principios generales, es por lo que este máximo Tribunal
"deberá restaurar la legalidad, declarando la
"inconstitucionalidad del artículo 140 fracción IV del
"de Procedimientos Civiles, ya que este precepto va en contra
"de la norma constitucional que motiva y funda este agravio,
"la cual como ya se dijo prohíbe con claridad el pago y cobro
"de costas judiciales sin hacer distinción alguna y tanto el
"precepto tildado de inconstitucional como la autoridad que
"resolvió el amparo hacen distinciones no apoyadas en ningún
"precepto constitucional.

"En tal virtud, es procedente que esta Superioridad
"revoque la sentencia en este punto y dicte la que
"corresponda conforme a derecho otorgando en su oportunidad
"el amparo y protección de la Justicia Federal".

CUARTO.- Previamente al análisis de los agravios
expuestos por el recurrente debe destacarse que de
conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del
artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, el recurso de

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

revisión en amparo directo debe limitarse, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

En esa virtud, la materia del presente recurso de revisión, se circunscribirá al pronunciamiento que el Tribunal Colegiado hizo sobre la constitucionalidad de los artículos 140, fracción IV Y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pero no respecto a la pretensión del recurrente en el sentido de que el Tribunal Colegiado no analizó debidamente la litis planteada, ya que tal argumento resulta inoperante por ser ajeno al tema constitucional al que debe circunscribirse la revisión.

QUINTO.- Son infundados los agravios que se hacen valer.

De la lectura de la sentencia recurrida, cuyas consideraciones en lo que interesan obran transcritas en el resultando tercero del presente fallo (fojas 9 a 27), se aprecia que los razonamientos en que se apoyó el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 140, fracción IV y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, consistieron básicamente en lo siguiente:

A). Que el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no vulnera el artículo 14 constitucional, pues de conformidad con este precepto es facultad del legislador ordinario fijar las

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

reglas que regirán el procedimiento, siempre apegadas a las bases y lineamientos establecidos por la Constitución, entre los cuales se encuentran la valoración de las pruebas por el juzgador.

B). Que la valoración de las pruebas basadas en las reglas de la lógica y de la experiencia no pugna con el artículo 14 constitucional, pues la apreciación de la prueba es generalmente la actividad intelectual que pugna con el raciocinio, pues el fin de la prueba es la comprensión de los hechos por parte del juez.

C). Que la jurisprudencia que cita el quejoso no es aplicable porque se refiere a la hipótesis en que el ordenamiento civil faculta a los jueces a resolver conforme a su leal saber y entender, lo que es diverso al caso del artículo 402, que se refiere a valoración de pruebas.



JEFATURA DE LA
SECRETARIA GENERAL

D). Que el artículo 402, citado, no viola el artículo 16 constitucional, ya que ese precepto obliga al juzgador a analizar en conjunto las pruebas aportadas al proceso y la convicción del juzgador que se ha de formar por el engarce y relación de los diferentes datos que lleguen a su conocimiento, que exponga en su sentencia, señalando los efectos de la valoración jurídica realizada sobre la base procesal que haya sido válidamente reunida cumple con el requisito de fundar y motivar la causa legal del procedimiento.

Asimismo, en relación a la inconstitucionalidad que el antes quejoso hizo valer respecto de la fracción IV del

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, al estimar que se violan las garantías consagradas en los artículos 14 y 17 constitucionales, el referido Tribunal estimó:

1) Que el artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no vulnera el artículo 14 constitucional, ya que este precepto no prohíbe la condena en costas y sí señala que los juicios deben seguirse ante tribunales previamente establecidos, cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo que significa que se faculta al legislador ordinario para fijar las reglas que regirán el procedimiento, entre las cuales se encuentra la condena en costas.

2). Que el artículo 140, no limita el derecho de los particulares para oponer sus defensas, de ofrecer pruebas o de interponer recursos, sino lo único que pretende es que quien litigue en defensa de sus derechos lo haga en forma consciente y de buena fe, por ello prevé la sanción para quien con el pretexto de la defensa litigue de mala fe o pretenda retardar la impartición de justicia en perjuicio del interés social.

3) Que el artículo 140, fracción IV, no pugna con la disposición contenida en el artículo 14 constitucional, consistente en que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sin previo juicio, ya que para aplicar la condena en costas se requiere que exista un juicio en el que el afectado haga valer el recurso

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

correspondiente, que en la resolución se resuelva el recurso y se confirme en todos sus puntos resolutivos la sentencia.

4) Que el artículo 140, fracción IV, no viola el artículo 17 constitucional, ya que de lo dispuesto en este precepto se desprende que la prohibición que señala es de que los tribunales no cobren honorarios por realizar la función jurisdiccional, pero no se refiere al pago de gastos y costas, que es un resarcimiento a la contraparte por las erogaciones que tuvo que realizar, interpretación que se confirma con lo resuelto por el Constituyente de 17.

En contra de tales pronunciamientos se aduce en los agravios, que el Tribunal Colegiado realizó una interpretación subjetiva y doctrinal, carente de apoyo jurídico, ya que bien es cierto que el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles se refiere a una valoración de pruebas, es una valoración forzosa que debe realizar el juez en la sentencia y, constitucionalmente, no se permite efectuar una valoración atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, pues la sentencia toda en su contenido debe ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Que el Tribunal Colegiado sin fundamento ni motivo hizo una distinción entre el artículo 14 constitucional y el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles, pero el precepto constitucional no permite hacer distinciones y si en la sentencia se realiza una valoración de pruebas, ésta no puede hacerse conforme a las reglas de la lógica y la

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

experiencia, ya que el artículo 14 constitucional no lo permite, pues ordena que la sentencia debe ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica o en su defecto basarse en los principios generales del derecho.

Que por tanto las manifestaciones del Tribunal Colegiado en relación al mundo de la lógica y la experiencia resultan ser apreciaciones puramente doctrinales, carentes de base legal, no aplicables al momento de decidir una cuestión jurídica, ya que pretende separar la valoración de las pruebas que se da en la sentencia definitiva de un procedimiento judicial.

Que el argumento que emite el Tribunal Colegiado en relación a las tesis que invocó en su demanda es falso ya que la valoración de las pruebas se efectúa en la sentencia y por ello toda sentencia debe dictarse conforme a los lineamientos señalados en el artículo 14 constitucional, el cual no permite que se valoren las pruebas y con ello las sentencias conforme a las reglas de la lógica y la experiencia.

Por otra parte, añade el recurrente en sus agravios, que lo resuelto por el Tribunal Colegiado respecto a la inconstitucionalidad del artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es dogmático y carente de apoyo jurídico, ya que no existe precepto legal que corrobore su dicho y deja de aplicar correctamente el artículo 14 constitucional, el cual no señala en parte alguna la posibilidad de imponer una sanción o pago de costas a la parte que es vencida en juicio; por tanto, ninguna ley secundaria puede por sí sola crear

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

instituciones nuevas ni ampliar o adicionar el contenido de la norma constitucional.

Que en ese contexto lo resuelto por el Tribunal Colegiado carece de toda fundamentación y motivación, pues contrario a lo que manifiesta el artículo 140, fracción IV, si es contrario al artículo 14 constitucional, en cuanto a que este precepto no permite que exista una consecuencia de carácter pecuniario en perjuicio de alguna de las partes litigantes.

Que el Tribunal Colegiado no analizó debidamente la litis planteada, pues omitió analizar si el artículo 140B fracción IV, en cita, resultaba violatorio del artículo 14 constitucional.

Que en otro aspecto, el artículo adjetivo de ^{que} ~~que~~ ^{A. N.} ~~SECRETARIA GENERAL~~ se trata si es violatorio del artículo 17 constitucional, pues este precepto constitucional prohíbe sin distinción alguna las costas judiciales y si el Constituyente hubiese querido únicamente la prohibición de que los tribunales cobraran por administrar justicia, así lo habría establecido.

Son infundados los anteriores planteamientos conforme a los siguientes razonamientos.

El artículo 14 Constitucional dispone lo siguiente:

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.



AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad
"o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante
"juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos,
"en el que se cumplan las formalidades esenciales del
"procedimiento y conforme a las leyes expedidas con
"anterioridad al hecho.

"En los juicios del orden criminal queda prohibido
"imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón,
"pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente
"aplicable al delito de que se trata.

"En los juicios del orden civil, la sentencia
"definitiva deberá ser conforme a la letra, o a la
"interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se
"fundará en los principios generales del derecho".

Por su parte, el artículo 402 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone lo
siguiente:

"Art. 402.- Los medios de prueba aportados y
"admitidos, serán valorados en su conjunto por el juzgador,
"atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia. En
"todo caso el tribunal deberá exponer cuidadosamente los
"fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su
"decisión".

FEDERACION

Del texto constitucional transcrito se desprende
que la garantía de legalidad consagrada en el cuarto párrafo
de este precepto, vincula a cualquier sentencia definitiva
dictada en un procedimiento judicial civil (considerado en
sentido amplio), administrativo o del trabajo, a que la

SECRETARÍA
DE JUSTICIA

JUSTICIA
CION
DE ACUERDO

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

decisión de la autoridad que la pronuncie debe ceñirse a la letra de la ley aplicable al caso de que se trate o se base en la interpretación jurídica de la misma, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Consecuentemente, la garantía de legalidad, consagrada en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, necesariamente implica la existencia de una ley que resuelva el conflicto jurídico sometido al órgano jurisdiccional en sus aspectos procesales y de fondo planteados; y en el caso de que la solución del conflicto no sea posible conforme a una disposición jurídica, la autoridad puede acudir a los principios generales del derecho para resolver el problema planteado.

Del artículo 402, antes transcrito al inicio del presente considerando, se desprende que en este precepto establece el método de valoración de los medios de prueba aportados y admitidos en el juicio, consistente en que el juzgador debe valorar las pruebas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia y exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión.

En relación a la valoración de las pruebas conviene precisar que las legislaciones han regulado el método de valoración a que debe ceñirse el jugador, ya sea sujetándolo a reglas abstractas preestablecidas que le señalen la conclusión que forzosamente debe aceptar en presencia o por la ausencia de determinados medios de prueba, o por el

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95



contrario, otorgándole facultades para que haga una valoración personal y concreta del material probatorio.

El primer sistema es el que los tratadistas denominan de las pruebas legales, pruebas formales, pruebas tasadas o tarifa legal y el segundo llamado de libre apreciación de las pruebas, apreciación razonada, o de libre convicción.

Algunos tratadistas consideran que hay un sistema mixto en donde se otorgan al juzgador ciertas facultades para apreciar determinados medios de prueba y en el que se encuentran sujetos a reglas específicas de valoración de las pruebas aportadas en el juicio.

El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece en el artículo 402, en relación al valor de las pruebas un sistema de libre apreciación en el que el juzgador debe atender a las reglas de la lógica y de la experiencia, expresando cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, exceptuando en el artículo 403 a los documentos públicos a los que concede un valor probatorio pleno.

Ahora bien, la valoración de la prueba corresponde generalmente a la sentencia, puesto que es el momento procesal en que el juzgador adopta alguna decisión sobre los hechos sometidos a su conocimiento.

Sin embargo, no le asiste la razón al recurrente cuando afirma que el artículo 402, tantas veces citado,



DE JUSTICIA
ACION
AL DE ACUERDO

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

resulta violatorio de la garantía de legalidad, pues este precepto al establecer el método de valoración de las pruebas, no deja al juzgador la posibilidad de que la sentencia sea dictada sin ceñirse a la letra de la ley o a falta de ésta a los principios generales del derecho, ya que dicho dispositivo legal le indica al órgano jurisdiccional la forma en que debe efectuar el enlace de los medios probatorios que le son aportados, como es que los valore conjuntamente atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; expresando, además, los fundamentos de la valoración jurídica realizada.

En esas condiciones, aun cuando en este precepto contiene el sistema de libre apreciación de las pruebas es evidente que al encontrarse obligado el juzgador a exponer los fundamentos jurídicos de la valoración realizada y de su decisión, su resolución necesariamente la dictará conforme a las disposiciones legales que sean aplicables.

Por tanto, es ineficaz lo aducido por el recurrente en el sentido de que el juez no puede realizar la valoración de las pruebas atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, pues como correctamente lo resolvió el Tribunal Colegiado, el proceso de valoración o apreciación de la prueba implica fases sensoriales e intelectuales que consisten en la percepción, reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo que necesariamente debe apoyarse en las reglas de la lógica a fin de lograr un eficiente resultado.

Asimismo, cuando se hacen inducciones de los hechos, cosas o personas observados, o se aprecian los casos



AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

particulares de acuerdo con deducciones de reglas de experiencia, se aplican ineludiblemente las reglas de la lógica, de ahí que no sea posible separar la aplicación de estas reglas del acto de valoración de las pruebas, que a diferencia de la interpretación de la ley, buscan el verdadero contenido de las pruebas allegadas al proceso y de los hechos que lo constituyen.

En esas condiciones, al establecer el legislador en el artículo 402, el método de valoración de las pruebas que debe seguir el juzgador no contraría lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que al obligar al juzgador a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada obviamente lo constriñe a que su decisión se cña a los preceptos legales respectivos.

En las relatadas condiciones, como lo resolvió el Tribunal Colegiado, las tesis de jurisprudencia invocadas por la quejosa sí resultan inaplicables al caso a estudio por referirse a hipótesis diversas a las aquí examinadas.

En su restante agravio el recurrente aduce que contrariamente a lo resuelto en forma dogmática por el Tribunal Colegiado el artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sí infringe los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque nuestra Máxima Ley no prevé en ninguno de sus artículos la posibilidad de sancionar a un particular que haya sido vencido en juicio y si, en cambio, prohíbe las costas judiciales.

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

En relación a los argumentos expuestos por el recurrente, que quedaron resumidos al inicio de este considerando, este Tribunal Pleno ha resuelto, entre otros en el amparo directo en revisión 1830/94, resuelto el día diecisiete de abril de mil novecientos noventa y cinco, lo siguiente:

CUARTO.- En la primera parte de su segundo agravio "aduce la recurrente, en esencia, que el Tribunal Colegiado "realizó una apreciación dogmática y carente de apoyo "jurídico, al declarar constitucional el artículo 140, "fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el "Distrito Federal, pues contrariamente a lo resuelto, dicho "numeral sí viola el artículo 14 constitucional, en virtud de "que éste no señala en ninguna de sus partes la posibilidad "de imponer una sanción o pago de costas a la parte que es "vencida en juicio.

"Agrega que si la Constitución no prevé la "posibilidad de sancionar a una parte que resulte vencida en "juicio, no puede estimarse que por ello esté permitido, pues "las leyes secundarias no pueden rebasar el texto "constitucional.

"Resultan infundados estos argumentos en atención a "las siguientes consideraciones:

"El artículo 140, fracción IV del Código de "Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece:

"ART. 140.- La condenación en costas se hará ""cuando así lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del juez, ""se haya procedido con temeridad o mala fe.

""Siempre serán condenados:



AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"IV.- El que fuere condenado por dos sentencias
 "conformes de toda conformidad de su parte resolutive, sin
 "tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso,
 "la condenación comprenderá las costas de ambas instancias".

"Pues bien, como se advierte del numeral
 "transcrito, la condena en costas que prevé la fracción IV,
 "pretende que se indemnice a la contraparte de quien fue
 "vencido en dos sentencias conformes de toda conformidad, lo
 "que significa que no constituye una pena o sanción - en el
 "sentido que pretende la quejosa - para aquéllos que han
 "sido vencidos en juicio.

"La razón que justifica esa medida es la inherente
 "a que se promueva una apelación sólo para demorar o
 "entorpecer la ejecución de una sentencia recurrida, tomando
 "en cuenta además los daños y perjuicios que se pudieron
 "ocasionar a la parte contraria.

"Por otra parte, la circunstancia de que el
 "artículo 14 constitucional no contemple la condena en
 "costas, no significa que en la legislación secundaria no
 "puede establecerse, toda vez que a ella le corresponde
 "regular las modalidades que pueden suscitarse en el proceso,
 "siempre y cuando no se menoscaben las formalidades
 "esenciales del procedimiento.

"Al respecto debe señalarse que este mismo criterio
 "fue sustentado por el Tribunal Pleno al resolver los
 "siguientes asuntos:

"Amparo directo en revisión 1970/89, promovido por
 "Restaurantes y Bares Unidos, Sociedad Anónima, resuelto en
 "sesión de veintidós de enero de mil novecientos noventa y
 "uno, por mayoría de dieciséis votos, bajo la ponencia del
 "ministro Santiago Rodríguez Roldán.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE JUSTICIA
 NACIONAL
 TRIBUNAL DE ACUERDOS

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

"Amparo directo en revisión 151/93, promovido por María Isabel Díaz Ruíz, resuelto en sesión de ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de veintiún votos, bajo la ponencia del ministro Mariano Azuela Gutiérrez.

"Amparo directo en revisión 160/93, promovido por Carlos Ramón López Núñez, resuelto en sesión de ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de veintiún votos, bajo la ponencia del ministro Felipe López Contreras.

"Amparo directo en revisión 1756/93, promovido por Francisco Javier Soto González, resuelto en sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de diecinueve votos, bajo la ponencia del ministro José Antonio Llanos Duarte.

"En virtud de las consideraciones anteriores, resulta apegado a derecho lo considerado por el órgano colegiado en el sentido de que el vicio de inconstitucionalidad de un ordenamiento legal se da cuando un precepto de la Constitución va en contra de alguna de sus disposiciones, o bien, cuando se sale de los lineamientos que contiene la propia Carta Magna, pero de ninguna manera puede derivar del hecho de que lo que establece la ley ordinaria no esté previsto en la Constitución.

"En otro orden de ideas resulta ineficaz lo argumentado por la recurrente en la segunda parte de su agravio, en el sentido de que el artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles reclamado, viola en su perjuicio el artículo 17 constitucional al permitir la imposición y cobro de costas.

"Lo anterior es así, porque el Tribunal Colegiado en ninguna parte de su sentencia se ocupó de esa cuestión,

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95



"en razón de que la quejosa no expresó ningún concepto de violación al respecto.

"con independencia de lo anterior cabe mencionar que este Tribunal Pleno ha establecido el criterio de que el "multicitado precepto reclamado no viola el artículo 17 "constitucional, tal como se desprende de la tesis aislada P. "IX/90, visible en la página 45 de la Gaceta del Semanario "Judicial de la Federación número 33, correspondiente a "septiembre de 1990, que a la letra dice: "COSTAS JUDICIALES. ""LA CONDENA RESPECTIVA, PERMITIDA POR EL ARTICULO 140, ""FRACCION IV, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ""DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.- ""El artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos ""Civiles para el Distrito Federal, no contraviene lo ""dispuesto por el artículo 17 constitucional al permitir que ""los tribunales condenen a una de las partes al pago de las ""costas judiciales a su contraparte, toda vez que lo que la ""disposición constitucional prohíbe es que se cobre por el ""servicio de impartición de justicia, el cual debe ser ""gratuito, cuestión diversa que no puede confundirse con la ""condena en costas regulada por el artículo procesal de ""referencia".



CORTE DE JUSTICIA
NACIONAL
FEDERAL DE ACUERDO

El criterio anterior ha sido también sostenido por este Alto Tribunal al resolver los siguientes amparos en revisión, en los que se analizó que el artículo 140, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que establece la condena en costas no viola la garantía de audiencia:

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

Recurso de revisión en Amparo Directo 1807/88. Hylsa, S.A. 18 de abril de 1989. Unanimidad de veinte votos de los señores ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Sergio Novales Castro. Recurso de revisión en Amparo Directo 1970/89. Restaurantes y Bares Unidos, S.A. 22 de enero de 1991. Recurso de revisión en Amparo Directo 1551/88. Restaurantes y Bares Unidos, S.A. 4 de octubre de 1988. Recurso de revisión en Amparo Directo 151/93. María Isabel Díaz Ruiz. 8 de febrero de 1994. Unanimidad de veintiún votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón, Secretario: Manuel Armando Juárez Morales. Amparo directo en revisión 820/92. Elevadores Kone-Sabien, S.A. de C.V. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. Amparo directo en revisión 160/93. Carlos Ramón López Núñez. 8 de febrero de 1994. Ponente: Felipe López Contreras. Amparo directo en revisión 1756/93. Francisco Javier Soto González. 6 de octubre de 1994. Ponente: Llanos Duarte.

Asimismo, en los siguientes amparos en revisión se examinó que el citado artículo 140, fracción IV, no viola el artículo 17 constitucional:

Amparo en revisión 6096/71: Arturo Fuentevilla Frith. 17 de agosto de 1972. Unanimidad de 17 votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Amparo directo en revisión 1079/89.

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95



Angela Angeles Islas. 23 de enero de 1990. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Santiago Rodríguez Roldán. Secretario: Roberto Terrazas Salgado. Amparo directo en revisión 1089/90. Audelia Domínguez de Hernández. 23 de enero de 1991. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Samuel Alba Leyva. Secretario: Roberto Caletti Treviño. Amparo directo en revisión 872/91. Cleotilde Macín González. 15 de agosto de 1991. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Luis Fernández Doblado. Secretario: Roberto Terrazas Salgado. Amparo directo en revisión 6047/90. Blanca Girón de Cisneros. 10 de octubre de 1991. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Sergio Pallares y Lara. Amparo directo en revisión 269/94. Clara Suárez de Millares y otro. 6 de octubre de 1994. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.

Por todo lo anterior, al resultar infundados los agravios expresados por la recurrente, procede confirmar la sentencia sujeta a revisión.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Javier Soto González, en contra del acto reclamado a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

AMPARO DIRECTO EN REVISION 565/95

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Tribunal de su origen, y en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de once votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Gutiérrez, Doctor Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y Presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Fue ponente el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Firman los Ministros Presidente y Ponente con el Secretario General de Acuerdos que da fe.

EL PRESIDENTE.

JOSE VICENTE AGUINACO ALEMAN.

MINISTRO PONENTE:

SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.

LIC. J. JAVIER AGULLAR DOMINGUEZ.

RECIBIDO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
PARA NOTIFICACION EL 30 OCT. 1995

31 OCT. 1995
En ... y Por medio de lista, se
notificó la resolución anterior a las partes y al Ministerio Público
Federal. Conste